



VIEJONES

ciudad y de las leyes y reglamentos administrativos. 3.ª La instancia en que el Presidente de la Sociedad impugna las razones alegadas en la protesta, y pide a ese Gobierno que deje expedita la acción de la Junta directiva para ejecutar el acuerdo de la mayoría.

Id. id. Disponiendo que el Teniente de marino D. Agustín Anton continúe sus servicios en el apostadero de la Habana y que el Comandante de infantería de la escuela de la reserva D. José Michelena regrese a la Península.

Vistos los Reales decretos de 25 de Noviembre de 1863 y 14 de Diciembre del mismo año, que organizaron el Gobierno superior civil de esta Isla y las Inspecciones de Sociedades mercantiles por acciones y de Ferro-carriles.

Doña ISABEL II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren y a quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed que he venido en decretar lo siguiente:

Considerando que los socios que componen la mayoría y la minoría de las juntas de accionistas tienen por su parte el derecho de acudir a los Gobiernos superiores civiles; la minoría para que se suspenda la ejecución de los acuerdos contrarios a las leyes y reglamentos; la mayoría para que se deje la acción de la Sociedad libre y expedita, y que solo cuando los Gobiernos superiores civiles hayan resuelto estas pretensiones pueden acudir al Gobierno de S. M., porque si lo hicieran antes se suprimiría en el procedimiento administrativo una instancia a que tienen derecho todos los interesados.

Considerando que en este orden de proceder no debía haberse remitido el expediente a este Ministerio, sino a instancia de parte y cuando las cuestiones suscitadas por la minoría y la mayoría de la junta de accionistas estuviesen resueltas por ese Gobierno superior civil:

Considerando que para remitir el expediente en su actual estado no basta que la ley exija la aprobación de S. M. para que las Compañías de ferro-carriles puedan contratar determinados empréstitos, porque el art. 45 del Real decreto de 10 de Diciembre de 1858, único aplicable, solo exige la aprobación superior para la contratación de los que tienen por objeto completar una parte del capital social que no ha podido realizarse con la emisión de todas las acciones en que estaba dividido:

Que por otra parte, en 3 de Agosto de 1859, el Comisionado de Ventas de la provincia de Toledo pidió al Gobernador que se instruyera el oportuno expediente para la subasta de la finca número 243, que se hallaba sin petitorio a saber: un cuarto dehesa denominada del Conejo, arrendado en 600 rs., perteneciente al Sr. D. Ramón Vinader y Nuban, en su término; a la cual accedió la expresada Autoridad, de conformidad con lo informado por la Administración principal del ramo, acordando en el día siguiente que pasara al efecto a la Comisión de Ventas:

Considerando que al contratar un empréstito con este objeto no hacen las Sociedades de ferro-carriles más que el uso legítimo de un derecho que el Código de Comercio concede a toda persona civil, y la única obligación que les impone el art. 9.º del Real decreto de 8 de Febrero de 1865 para levantar fondos en una forma legal distinta de la de obligaciones hipotecarias, es la de no traspasar en sus compromisos por capital e intereses los límites que el mismo decreto señala, sin que ninguna otra disposición les exija la aprobación del Gobierno para contratar un empréstito cuando no está destinado a completar el capital social dividido en acciones:

Que en el Boletín oficial de la provincia correspondiente al día 2 de Diciembre de 1859, se anunció con el número de orden 244 la venta de una de las indicadas fincas, anunciándola en estos términos: un cuarto dehesa llamado del Conejo, de los propios de Robledo, en su término, de 677 fanegas, tierra inculta, excepto una pequeña parte que se encuentra roturada; su pasto, sabina, mata parda, tomillos y otras yerbas; su abrevadero, Navajo de la Sanguijuela; linda al Saliente cuarto de Pedro Cobo y vereda de los Cedaceros; Media día término de Alcazar; Poniente el mismo, el de Viveros y D. Francisco Baillo, y Norte dehesa del Marqués de Perales; produce en renta 600 rs., por lo que ha sido capitulada en 13.500 rs., y tasada en 40.620, que serviría de tipo a la subasta:

RESOLUCIONES TOMADAS POR EL MINISTERIO DE MARINA. 28 Octubre. Admitiendo la renuncia que hace de su destino el Asesor de Marina del distrito de Atriz.

Que así las cosas, varios vecinos de Robledo se quejaron de que Baillo, comprador de la dehesa Hoya del Conejo, había invadido terrenos propios de los exponentes; y pasada la instancia a la Administración principal del ramo de la provincia, la misma Administración informó favorablemente a los reclamantes, pero llamando la atención al propio tiempo sobre que Baillo se suponía comprador de la dehesa Hoya del Conejo, cuando de los antecedentes que obraban en aquellas oficinas resultaba que esa dehesa no se había enajenado; manifestando en apoyo de ello que pedida en 3 de Agosto de 1859 por el Comisionado principal de Ventas la enajenación de la dehesa llamada Cuarto del Conejo, señalada en el inventario con el número 244, fue esta la que mandó medir y deslindar, y no la de la Hoya del Conejo:

te suario, en que se averiguasen las falsificaciones que se hubieran cometido. Que instruido Baillo, reclamó a mi Gobierno contra el precedente acuerdo de la Junta, y en vista de todo, la Sección de Hacienda del Departamento de Estado y la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, fueron de opinión de que se desestimase la reclamación del interesado, sosteniendo el acuerdo de que se alzaba, dictándose en consecuencia Real orden en 3 de Octubre de 1863, por la cual de conformidad con estos dictámenes, se desestimó el recurso de alzada y se ratificó el acuerdo de la Junta superior de Ventas.

Vista la demanda que en nombre del interesado presentó ante el Consejo de Estado el Licenciado Don Fernando Lopez de Sagredo, reemplazado después por el de igual clase D. Ramón Vinader y Nuban, con la pretensión de que se revoque la expresada Real resolución y se deje en su valor y fuerza el contrato de compra de la dehesa del Conejo en favor de Don Francisco Baillo, condenando a la Administración al rescimiento de daños y perjuicios, ó cuando a esto no hubiere lugar, que se reserve al demandante su derecho para reclamarlo de las personas ó corporaciones que correspondiera en la forma procedente:

Considerando que de los informes de la Administración de Propiedades del Estado en la provincia de Albacete resulta que la dehesa de los propios de Robledo, mandada subastar en Agosto de 1859, fue la señalada en el inventario con el número 244, llamada del Conejo, cuya renta era de 600 rs. vn., pero no la titulada Hoya del Conejo, inventariada con otro número y que producía en renta 4.600 rs.

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Octubre de 1865, en los autos que penden ante Nos por casación en los autos que en el Juzgado de primera instancia de Valladolid y en la Sala primera de la Real Audiencia de Valladolid por Manuel Gallego, como marido de María Santos Torio, contra Jerónimo de Vega, sobre nulidad de un pleito y adjudicación de bienes de un legado pio:

diere adquirirla por derecho de patronato, la obtendría por los llamamientos de la fundación, ateniéndose a lo que exista, al modo de suceder en las vinculaciones reales, toda vez que era la hija mayor del último poseedor, que no había dejado varones.

Considerando que según lo prevenido en la ley 2.ª, tit. 16, libro 4.º de la Novísima Recopilación, las capellanías inócnas que se han declarado legados pios nunca deben reputarse beneficios eclesiásticos, por lo cual es manifiesta la incompetencia con que conoció el pleito de adjudicación en 1825 la jurisdicción ordinaria, ó sea el Alcalde de Cercedos que la desempeñaba:

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Octubre de 1865, en los autos que en el Juzgado de primera instancia del distrito del Salvador en la ciudad de Granada y en la Sala primera de la Audiencia de aquel territorio ha seguido Doña Ana Colanda y Torres, como tutora y curadora de sus menores hijos, con Doña Juana Sandoval, sobre nulidad de una transacción; pendientes ante Nos en virtud de apelación interpuesta por Doña Ana de la providencia que en 3 de Febrero último dictó la referida Sala:

Considerando que si bien no aparecen firmadas las notificaciones que se hicieron en aquel pleito, esto es conforme a la práctica que se observó siempre hasta que la ley de 1837 mandó que las notificaciones se firmasen por los interesados ó un testigo en su nombre:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Octubre de 1865, en los autos que penden ante Nos por casación en los autos que en el Juzgado de primera instancia de Valladolid y en la Sala primera de la Real Audiencia de Valladolid por Manuel Gallego, como marido de María Santos Torio, contra Jerónimo de Vega, sobre nulidad de un pleito y adjudicación de bienes de un legado pio:

Considerando que el Sr. D. Jerónimo de Vega, y hoy su hijo Jerónimo, de los bienes del legado pio a virtud de un pleito que los dichos litigantes hubieran sufrido el recurrente en aquel pleito por la falta de representación legal de su madre ó por otro motivo pudo reclamarlos durante su menor edad y en los cuatro años siguientes que señala la ley para la restitución in integrum:

Que para poner en claro los hechos se mandó al Ayuntamiento de Robledo que manifestara las dehesas que poseyeron los propios con el nombre de Conejo y Conejo, y si alguna, y si las tituladas Hoya del Conejo y dehesa del Conejo, que producían en renta 1.600 rs. la primera y 600 la segunda, ignorando por qué se había atribuido a la una la venta de la otra:

Considerando que en virtud de lo prevenido en la ley 2.ª, tit. 16, libro 4.º de la Novísima Recopilación, las capellanías inócnas que se han declarado legados pios nunca deben reputarse beneficios eclesiásticos, por lo cual es manifiesta la incompetencia con que conoció el pleito de adjudicación en 1825 la jurisdicción ordinaria, ó sea el Alcalde de Cercedos que la desempeñaba:

Que en esta vista la Junta superior de Ventas, de conformidad con lo propuesto por la Asesoría general del Ministerio de Hacienda y de la Dirección del ramo, acordó en sesión de 12 de Noviembre de 1862 declarar la nulidad de la venta de la referida finca; que se devolviera a Baillo el importe de los plazos satisfechos y gastos de subasta, con deducción del producido líquido de la finca en el tiempo que la había poseído, y que se pasase el expediente a los Tribunales de Justicia para la instrucción del competente suario, en que se averiguasen las falsificaciones que se hubieran cometido.

JUNTA DE LA DEUDA PÚBLICA.

Tabla con 4 columnas: Sujetos que han hecho las proposiciones, Clase de Deuda, Importe nominal, Cambio. Incluye sub-tablas para 'Proposiciones presentadas' y 'Proposiciones admitidas'.

D. Jaime Codina y el Ministerio fiscal, sobre defensa por pobre: Resultando que demandado el primero por el segundo para el pago de cierta suma procedente de la venta de algunos géneros, solicitó aquel que se le declarara pobre, concepto de pobre porque carecía de toda clase de bienes, debiendo su subsistencia al jornal eventual que le pagaba a 6 rs., que se pronunciaba ya en su oficina de sastrería, ya en otras ocupaciones en clase de dependiente de alicante:

Resultando que Codina impugnó esta pretensión por que Soler era dueño de la tienda núm. 4 de la calle de Moncada y socio de otra de la calle de la Avelana, número 1, pagando mayor contribución que la que exige el artículo 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque aun cuando decía haberlas traspasado, el traspaso era simulado:

Considerando que con arreglo al párrafo cuarto del art. 181, que se supone infringido, la declaración de pobreza en favor de los que ejercen alguna industria solo se concede a los que pagan una cuota inferior a 200 rs. en las capitales de provincia de primera clase:

Considerando además que el citado artículo está subordinado en su aplicación a las modificaciones del 183, que determina que cuando alguno reúne dos ó más industrias se computen los rendimientos de todas ellas, y no se otorgue la defensa por pobre si reunidas excedieren los tipos señalados en el art. 182:

En la villa y corte de Madrid, á 31 de Octubre de 1865, en los autos que en el Juzgado de primera instancia del distrito del Salvador en la ciudad de Granada y en la Sala primera de la Audiencia de aquel territorio ha seguido Doña Ana Colanda y Torres, como tutora y curadora de sus menores hijos, con Doña Juana Sandoval, sobre nulidad de una transacción; pendientes ante Nos en virtud de apelación interpuesta por Doña Ana de la providencia que en 3 de Febrero último dictó la referida Sala:

Resultando que desestimada por sentencia de primera y segunda instancia la demanda deducida en estos autos, interpuso la parte actora recurso de casación con arreglo al art. 1.012 de la ley de Enjuiciamiento civil, el cual fue admitido, previéndosele a la Doña Ana que prestara caución en cantidad de 4.000 rs. para las results del mismo:

Resultando que notificado este proveído a los Procuradores de las partes en 9 de Enero último, el de Doña Juana presentó escrito el día 21 acusando la rebeldía a su contrario y pidiendo que se declarase desierto el recurso; lo que así se estimó por auto del 24:

Resultando que el 30 presentó el de Doña Ana la escritura de caución que está habido otorgado en el 24, manifestando que no había podido hacerlo antes por el retraso de los correos, y pidiendo que se reformara el expresado auto, y admitiéndose la caución se reanudara el pleito a este Supremo Tribunal:

Y resultando que por providencia de 3 de Febrero se denegó esta solicitud y se mandó estar lo acordado en el día 21 del mes anterior, habiéndose después admitido la apelación que interpuso la parte de Doña Ana, vistiéndose, siendo Ponente el Ministro D. Ventura de Colas y Pando:

Considerando que se sigue lo dispuesto en el art. 1.031 de la ley de Enjuiciamiento civil de haber y acreditar el depósito, que debe preceder a la remesa de los autos, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del en que se admitan los recursos de casación:



